

Sociedad

NARCOTRÁFICO E INTERVENCIÓN MILITAR EN MÉXICO, 2006-2012

• Erubiel Tirado* •

1. Introducción

El segundo sexenio en el poder del Partido Acción Nacional (PAN), con el gobierno encabezado por Felipe Calderón, puede caracterizarse como la conclusión de un esquema de seguridad reactivo y con cambios estructurales insuficientes. El resultado, como se advertirá a lo largo de este ensayo, es la persistencia de la violencia asociada con el narcotráfico y el crimen organizado, con modificaciones evolutivas que siguen desafiando la efectividad de la estrategia planteada y, en última instancia, la autoridad del Estado mexicano.

Los ejes de análisis que se proponen en esta perspectiva son el narcotráfico y el empleo de las Fuerzas Armadas en México, como variables tanto de la crisis de seguridad como parte de la solución inacabada emprendida por el gobierno saliente de Calderón. Vale decir que en el

* Es licenciado en Derecho por la UNAM, y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Londres. Consultor asociado del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) de Londres, y coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional en México de la UIA, Ciudad de México.

diagnóstico de la crisis de seguridad, la variable institucional (Fuerzas Armadas) se mira inicialmente en forma dual: también como parte del problema antes que la solución.

Ésta es una visión analítica con elementos que suelen omitirse o no fueron considerados en los estudios realizados en los últimos años, tanto por los noveles analistas de seguridad como por los expertos del tema, dentro y fuera del país. Aquí se hace una descripción de estos tres componentes, a efecto de establecer las razones de los limitados resultados de la estrategia de seguridad, y el posible cambio que tendría que observar el gobierno en los siguientes años, si se desea replantear dicha estrategia con elementos que permitan anticipar cierta eficiencia y gobernabilidad para el futuro inmediato.

2. Transiciones del narcotráfico y de la política en México

La crisis de seguridad pública enfrentada por Felipe Calderón durante su gestión está marcada por la creciente y compleja actividad del narcotráfico que propició una serie de fenómenos cambiantes en sus manifestaciones. Los aspectos asociados atañen a la mayor disponibilidad de armas ilegales en las calles, producto del contrabando proveniente de Estados Unidos, o como parte de los pagos que ofrecen los cárteles colombianos a sus contrapartes mexicanas. Otro aspecto es la explosión de la violencia en el país como resultado tanto de la luchas entre los cárteles mexicanos de la droga, que incluso pueden ser internas, como del enfrentamiento con las fuerzas federales de seguridad del gobierno: el Ejército y la Armada, la Policía Federal con sus cambiantes denominaciones, heredera de la preventiva y la Policía Ministerial, también modificada nominalmente y heredera de la Judicial Federal, así como su experimento posterior y fallido como Agencia de Investigación, émula del FBI estadounidense.

El incremento en el consumo de estupefacientes es otra variable de un patrón que cambió la característica de este país, que pasó de ser un lugar de tránsito de drogas a ser uno de consumidores. Esto se debió a la estrategia, en la década de los noventa, de suministrar a los cárteles mexicanos una porción de la droga que transportaban a Estados Unidos, como parte del pago por la operación. La corrupción gubernamental, en relación con el narcotráfico y el crimen organizado, también observa tendencias de cambio que pueden tener consecuencias institucionales en el mediano y largo plazos. Originalmente, la corrupción institucional giraba en torno a meros acuerdos de “hacerse de la vista gorda” sobre las actividades delictivas, sobornando esencialmente a mandos intermedios (y a veces superiores) de las fuerzas de seguridad (incluyendo al Ejército). El acuerdo y el control sobre el fenómeno eran tal que los operadores federales, en especial los mandos de la policía política mexicana como la Dirección Federal de Seguridad (1947-1984), determinaban zonas de influencia y rutas para las bandas de narcotraficantes. Este esquema operó sobre la base de que la actividad del narco no llamase demasiado la atención y ello implicaba también un control sobre sus expresiones de violencia.

La necesidad del gobierno de satisfacer una agenda de seguridad de carácter transnacional, teniendo a Estados Unidos como principal eje de dicha agenda, desde mediados de la década de los noventa, hizo cambiar de modo gradual diversos aspectos del fenómeno del narcotráfico: el endurecimiento de las medidas contra el paso de la droga por zonas fronterizas (al norte y sur del país) y del Caribe (operaciones de “sellamiento”) hizo que se diversificaran las rutas por otras partes del territorio. Esta diversificación del narco trajo consigo la necesidad de articular redes de complicidad con fuerzas de seguridad del gobierno en los niveles municipales y, en algunos casos, estatales.

Lo anterior está asociado con la mayor visibilidad y escrutinio público de las fuerzas federales, que tienden a hacer más sofisticada la penetración del narco en sus filas, pero también permiten trasladar el eje de la corrupción hacia instancias de seguridad que hasta hace unos años no participaban en el “arreglo”.

Otro factor de esta transición es la pérdida de verticalidad en el esquema de corrupción con el poder público: anteriormente, era suficiente acercar el dinero o la amenaza (de muerte) a unos cuantos personajes clave del aparato gubernamental para garantizar la operación delictiva. Con la pluralidad política también se perdieron los controles verticales y autoritarios del régimen priísta, y el crimen organizado se vio obligado a ampliar sus redes de corrupción hasta cierto límite, en tanto sus márgenes de ganancia lo posibilitan. El límite que impone esta diversificación se ve reflejado en el despliegue de una estrategia que le permita economías de escala en cuanto a sus actividades: penetrar y controlar estructuras de seguridad.

El mecanismo inicial de esta estrategia es “cultivar” a políticos locales, reservando para el narco la imposición de los nombramientos en el área de seguridad, ya sea en nivel de dirección de policías municipales, o bien en nivel de mandos de policías estatales. Esto marca una pauta de cambio en la transición del crimen organizado, ya que pasó del acuerdo informal con autoridades policiacas y militares, a penetrar e infiltrar a las clases políticas locales, como autoridades electas en funciones (gobernadores, presidentes municipales, congresistas federales y locales con influencia regional).

En épocas recientes, se observa una estrategia de cooptación o infiltración de la clase política desde antes de su ascenso a posiciones de responsabilidad, sea legislativa o gubernamental. El reconocimiento presidencial de este fenómeno comprendió, en un inicio (noviembre de 2007), ciertos niveles de gobierno de carácter local, pero era difícil

suponer que el poder corruptor del narco se detendría en el ámbito federal o que sólo tuviera un bajo perfil. Esto ha quedado demostrado con los eventuales escándalos de corrupción y asesinatos de funcionarios de la estructura de seguridad, que ha involucrado, incluso, al sector militar en niveles sensibles de responsabilidad en el desarrollo y la implementación de acciones de la lucha antinarco de Calderón.

3. El tamaño del problema: drogas y poder del narcotráfico

En el análisis del fenómeno de las drogas se establecen tres parámetros elementales que comprenden la producción, el tráfico y el consumo. En mayor o menor medida, durante la última década, México se ha involucrado en las tres variables y no sólo en alguna de ellas, como se advirtió líneas arriba. Se caracterizó por ser un país eminentemente de tráfico de drogas, productor relativo y a veces hasta de monocultivo (sólo marihuana o heroína, según el periodo que se analice), pero no siempre consumidor.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la producción de cocaína en Sudamérica se mantuvo entre 800 y 1 100 toneladas desde mediados de 1990 hasta casi la primera década del presente siglo.¹ El 40% de la cocaína que se produce es consumida en el norte del hemisferio (Estados Unidos y Canadá) y pasa por México. Del total de la heroína que se genera en el mundo, entre 5% y 9% es de origen mexicano (83% se elabora en Afganistán y 5% en Myanmar) y se destina prácticamente en su totalidad al mercado estadounidense.²

¹ United Nations Office on Drugs and Crime. *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Threat Assessment*, Nueva York, UNODC, 2010, p. 82.

² United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2011*, Nueva York, UNODC, 2010, pp. 35, 68 y 69.

Por su parte, tanto la marihuana como las drogas sintéticas (anfetaminas) que se producen en México, y la creciente cantidad de confiscaciones en los últimos años (en particular en la frontera México-Estados Unidos), en proporción directa también suponen un incremento productivo que se destina, de igual modo, al mercado de Estados Unidos: 70% de la marihuana incautada en el mundo ocurre en el norte del hemisferio, así como 44% de las metanfetaminas.³

En el ámbito del consumo de drogas, en especial en lo que respecta a la cocaína y siguiendo un patrón de cambio que se manifestó en las pasadas dos décadas, se observa ya una demanda específica y considerable: en 2010 se estimó que 200 toneladas (entre 8% y 12% de la producción anual) de cocaína se consumieron en Latinoamérica.⁴ Para México, en particular, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, hay 1.7 millones de “adictos” (la literatura especializada refiere el término “usuario” o “consumidor”) a la cocaína, más de tres millones a la marihuana y más de 367 mil a las anfetaminas.⁵

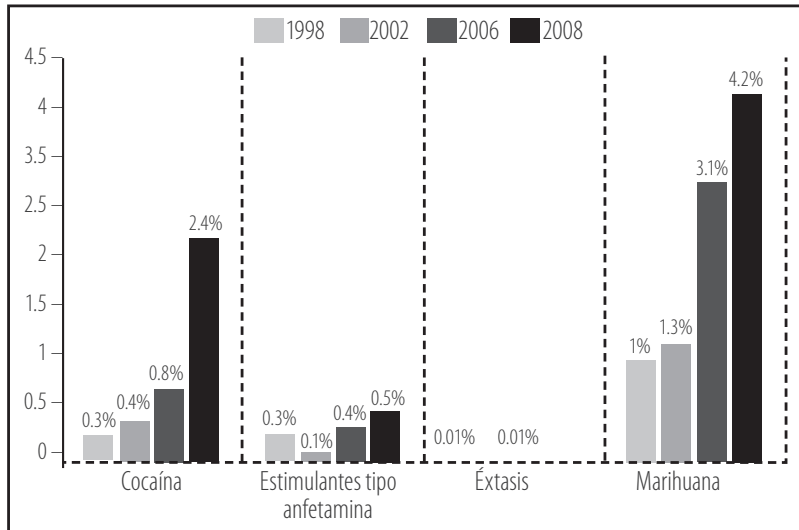
En forma paralela, el fenómeno de las drogas se analiza desde la óptica de las organizaciones criminales, toda una fenomenología de delitos asociados al narcotráfico donde destaca la creciente violencia. El estudio ponderado de estas variables aporta datos respecto al alcance o la influencia del narcotráfico en un país o región determinada. En el caso de México, por un lado, se observan zonas de influencia específica, que tienen un valor geográfico estratégico, sea por su posición fronteriza (al sur y al norte del país), sea por las rutas que dominan el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, junto con la comisión de delitos asociados como el tráfico de indocumentados, secuestro, piratería, etcétera.

³ *Ibíd.*

⁴ UNODC. *The Globalization...*, op. cit., p. 82.

⁵ Comparecencia del secretario de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, el 2 de febrero de 2011.

■ **Gráfica 1** Población consumidora de drogas en México



Nota: En 1998, 2002 y 2008 el grupo de edad es de 12-64 años, y en 2006 es de 15-64 años de edad.

Fuente: UNODC. Informe mundial sobre las drogas, 2009, Nueva York, ONU; Secretaría de Salud. "Encuesta Nacional de Adicciones", México, SS, junio de 2010.

El volumen de ganancias que representa la actividad del narcotráfico, junto con los otros delitos, es un parámetro que permite aproximar el incentivo que representa pese a las acciones gubernamentales. Sin cifras oficiales definitivas, debido a la falta de uniformidad metodológica que utilizan tanto entidades gubernamentales como académicas, el cálculo de ganancias del narco en México oscila, según el gobierno estadounidense, entre 19 y 39 mil millones de dólares al año (a fines de 2009, el exzar antidrogas, Barry Mc Caffrey, lo establece en más de 25 mdd), aunque la estimación más baja se ubica en siete mdd.⁶

⁶ Cifras referidas en Bruce Bagley. *Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty-First Century*, Washington, D. C., Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program, Update on the Americas, agosto de 2012, p.16, cita 32.

Aun considerando la estimación más baja, el monto en sí es suficiente para determinar, como factor primario, el incentivo estructural que ofrece el narcotráfico para subsistir, actuar y penetrar no sólo las instituciones, sino los tejidos sociales: si bien comunidades enteras son sometidas por el temor que infunde la violencia *per se*, también es cierto que los jefes y los subjefes del narcotráfico adquieren consensos sociales al asumir funciones “vigilantes” (contra ladrones o secuestradores de poca monta, o controlar la delincuencia ordinaria o común expropiando así una función pública estatal) o convertirse en “modelos” de aspiración para una masa de jóvenes (entre cinco y siete millones) que no tienen un espacio para estudiar o trabajar (de ahí que se observe el fenómeno de los sicarios menores de edad).⁷

Estas variables de análisis no son comentadas con tanta frecuencia, porque se presta mayor atención a otros factores como la capacidad de fuego de los cárteles que, sin duda, es importante; al respecto, hay más información dura, aunque no se abordan cuestiones estructurales en la naturaleza de la disponibilidad de armamento en el país. En efecto, el análisis parte de los decomisos de armas; entre 2006 y 2010 se observa una tendencia creciente no sólo en términos cuantitativos, sino en la naturaleza y la calidad de las mismas, que son indicativos de la evolución del poder de fuego de las organizaciones criminales.

La disponibilidad de armas en el país es un fenómeno que se ha abordado sólo en los últimos años, y que el propio gobierno, desde su perspectiva de la relación bilateral con Estados Unidos, ha incluido en su agenda. México ocupa el séptimo lugar mundial de posesión de armas en manos de civiles. Debido a las restricciones legales, la estimación de armas registradas (incluye las de fuerzas policiales y de civiles) *versus* las sin registro observa una relación de un tercio contra dos. Es decir, sólo una tercera parte del arsenal que circula en el territorio nacional es legal.

⁷ Ciro Murayama. “Ejército delincuencia de reserva”, en *Nexos*, núm. 409, enero de 2012, pp.13-14.

CUADRO 1 Características del flujo de armas Estados Unidos-México

Rutas	
Fuente	Tiendas de armas al sur de la frontera y ferias especializadas: Texas, California y Arizona.
Vector	Terrestre (vehículos privados).
Destino	México, hacia los estados de Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua.
Valor (del mercado)	
Volumen anual del mercado	20 000 armas (aprox.).
Valor anual en el destino	20 mdd.
Traficantes	
Grupos involucrados	Grupos pequeños semiautónomos de ciudadanos de Estados Unidos y México.
Lugar de los traficantes	Sureste de Estados Unidos y México.
Amenaza	
Tendencia estimada	Estable.
Efectos potenciales	Muertes en México ocasionadas por la guerra entre cárteles de drogas (y enfrentamientos con autoridades).
Posibilidad de que los efectos se actualicen	Alta.

CUADRO 2 Armas en México

Con registro Sedena*	2 534 000
Sin registro (ilegales)	10 000 000
Civiles	2 000 000
Seguridad pública	407 000
Seguridad privada	29 000
Total**	15 550 000

* Según datos de la Sedena, Reforma, 24 de marzo de 2011, p. 9. Se excluyen armas de las Fuerza Armadas mexicanas, aproximadamente 500 000 unidades (contabilizadas en el reporte de la ONU).

** Datos aproximados.

Fuente: Elaboración propia con base en UNODC (2010) y diario *Reforma*.

La ONU, de acuerdo con datos oficiales de armas confiscadas, establece que 69% de las armas ilegales que están en México provienen de Estados Unidos, especialmente de las tiendas o armerías de los estados

fronterizos de California (20%), Arizona (10%) y Texas (39%). Las tiendas fronterizas (6 700) representan 12% del total que hay en la Unión Americana; el 31% restante de dicho armamento no tiene un origen definido. Asimismo, según datos del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (abreviado ATF, por sus siglas en inglés), desde hace una década, de las armas que provienen de Estados Unidos sólo 10% tiene un origen ilegal al tratarse de armas robadas; la gran mayoría es adquirida legalmente en su territorio. Las propias autoridades estadounidenses asumen que hay un componente de complicidad en la distribución y venta de armas (*straw purchasers*) hacia compradores que saben, de antemano, que las transportarán ilegalmente a México.

CUADRO 3 Desempeño gubernamental en materia de confiscación de drogas, 2006-enero 2011⁸

	Total de aseguramiento por periodo		Variación 2006-2011 vs. 2000-2005
	1 Dic. 2000 - 20 Ene. 2005	1 Dic. 2006 - 20 Ene. 2011	
Drogas (kgs)			
Cocaína	94 583.7	101 273.0	7%
Marihuana	8 086 904.7	8 375 411.5	4%
Semilla de Marihuana	47 688.7	56 336.8	18%
Semilla de Amapola	5 437.5	11 209.1	106%
Metanfetaminas	2 628.9	21 976.9	736%
Pastillas MDMA (éxtasis)	337	22 499	6 576%
Pastillas psicotrópicas	43 840 033	61 000 535	39%
Laboratorios	81	480	493%

Fuente: Sistema estadístico uniforme para el análisis de la delincuencia (SEUNAD).

⁸ Comparecencia del secretario de Seguridad Pública... , *op. cit.*

■ **CUADRO 4** Desempeño gubernamental en materia de confiscación de armas, decomiso de dinero y detenciones, 2006-enero 2011⁹

	<i>Total de aseguramiento por periodo</i>		<i>Variación 2006-2011 vs. 2000-2005</i>
	<i>1 Dic. 2000 - 20 Ene. 2005</i>	<i>1 Dic. 2006 - 20 Ene. 2011</i>	
Armas totales	28 829	97 773	239%
Armas cortas	18 052	41 292	129%
Armas largas	10 777	56 481	424%
Municiones	1 885 574	10 064 309	434%
Granadas	108	7 766	7 091%
Dinero			
Moneda nacional	27 702 769	383 021 230	1 283%
Moneda extranjera (dólares)	41 510 721	425 627 701	925%
Vehículos asegurados	15 220	44 577	193%
Personas detenidas	70 019	131 091	87%

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD).

Asimismo, con base en la cantidad y el tipo de armamento confiscado por el gobierno de Calderón,¹⁰ además de extrapolar el número de detenidos (suponiendo que en efecto son miembros de organizaciones criminales), se hace una estimación de la fuerza total de elementos armados de los cárteles. Con un promedio de 25 mil armas confiscadas por año, entre 15 y 20 mil personas por año, se calcula que el ejército del narco sea, aproximadamente, entre 200 y 250 mil personas.

El análisis particular de las organizaciones del tráfico de drogas que operan en México y más allá de sus fronteras al norte y al sur, observa también cambios que permiten dimensionar el problema que enfrenta el Estado mexicano. Hasta hace un par de lustros, el país manifestaba actividades de organizaciones verticales y relativamente segmentadas en diversas regiones. La estrategia de seguridad, en buena parte indu-

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Considerando que corresponda a la misma proporción confiscada de las drogas respecto de las que pasan por territorio mexicano, de 8% a 10% aproximadamente del total.

cida por Estados Unidos, y siguiendo el parámetro colombiano de la década de los noventa, en el sentido de descabezar organizaciones criminales y fragmentar sus estructuras sin desmantelarlas, ha producido cierta dispersión y alterado los patrones de violencia en el país.

Hacia mediados de la primera década del presente siglo podía establecerse la existencia de cinco o seis organizaciones de narcotráfico (los llamados cárteles de la droga) con marcada influencia y definida división territorial en el país:¹¹ de Sinaloa (en expansión hacia el norte, la península de Yucatán y la frontera sur); de Tijuana; de (Ciudad) Juárez; del Golfo (de México); del Milenio, y La Familia Michoacana. Actualmente, producto de la estrategia gubernamental con el involucramiento primordial del Ejército y la ayuda de Estados Unidos, las organizaciones criminales del narcotráfico se han multiplicado y se contabilizan hasta 12.

■ **CUADRO 5** Proliferación de cárteles mexicanos, 2006-2010¹²

2006	2007-2009	2010
Cártel del Pacífico	Cártel del Pacífico	Cártel del Pacífico
	Cártel de (los Hermanos) Beltrán Leyva	Cártel del Pacífico Sur
		Cártel Independiente de Acapulco
		Cártel de "La Barbie"
Cártel de Juárez	Cártel de Juárez	Cártel de Juárez
Cártel de Tijuana	Cártel de Tijuana	Facción de "El Teo"
	Facción de "El Teo"	Cártel de El Golfo
Cártel de El Golfo	Cártel de El Golfo-Zetas	Cártel de Los Zetas
La Familia Michoacana	La Familia Michoacana	La Familia Michoacana
Cártel del Milenio	Cártel del Milenio	La Resistencia
		Cártel de Jalisco Nueva Generación
6 organizaciones	8 organizaciones	12 organizaciones

¹¹ United States Governmental Accountability Office (GAO). *Drug Control. U.S. Assistance has helped Mexican Counternarcotics Efforts, but Tons of Illicit Drugs Continue to Flow into the United States*, Report to Congressional Requesters GAO-07-1018, Washington, D. C., agosto de 2007, p. 16.

¹² Bruce Bagley, *op. cit.*, p. 9.

— ■ **CUADRO 6**

Detenidos pertenecientes a algún cártel del narcotráfico, 2006-2011¹³

<i>Concepto</i>	<i>Acumulado de detenidos 2006-2011*</i>
Total de personas detenidas por la policía federal	50 717
Total de personas detenidas vinculadas con alguna organización delictiva dedicada al narcotráfico	2 035
<i>Detenidos por organización delictiva</i>	
Cártel del Pacífico**	413
Cártel del Golfo/Zetas	732
Cártel de los Arellano Félix	65
La familia Michoacana	588
Cártel de Juárez	199
Cártel del Norte del Valle de Colombia	38
Líderes o lugartenientes detenidos con nivel de mando	129

* Datos al 20 de enero.

** Incluye a los detenidos pertenecientes a la organización delictiva de "Beltrán Leyva" y de Edgar Valdez Villarreal.

Vale decir que para el gobierno calderonista, y algunos analistas, se sigue considerando que sólo hay cinco o seis organizaciones de narcotráfico en México y no se comparte del todo el argumento de la dispersión.

4. Fuerzas Armadas y lucha contra el narcotráfico. Una aproximación

La estrategia de seguridad tiene vicios de origen, al impulsarla primero como un recurso político auxiliar en la restauración de la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón. Tanto la administración calderonista como algunos analistas rechazan o minimizan el componente o el contexto político en el que se impulsa la estrategia de seguridad del

¹³ Comparecencia del secretario de Seguridad Pública. . . , *op. cit.*

régimen desde sus primeros días de gestión.¹⁴ Sin embargo, desde una perspectiva amplia de análisis y tomando en cuenta los antecedentes históricos del uso político de las Fuerzas Armadas, debe considerarse este factor militar en el (re)lanzamiento,¹⁵ ahora con mayores proporciones, del Ejército a las calles del país. Primero fue en el estado de Michoacán, al iniciar diciembre de 2006. Por el despliegue operativo y el reforzamiento mediático, hubo un repunte en la popularidad presidencial. Inicialmente, la estrategia se planteó sólo bajo un mero esquema presencial castrense, calculando que con el Ejército en las calles no habría respuesta armada del crimen organizado.

En este contexto, el Ejército fue el instrumento presidencial en cuanto que la policía federal (preventiva como se llamaba entonces) experimentó un crecimiento exponencial que no necesariamente fue acompañado de un verdadero esquema de profesionalización y de supervisión de los nuevos cuadros, pero sí con el consecuente aumento de recursos. Al inicio del gobierno de Calderón, si bien militarizada, no alcanzaba los cinco mil efectivos, ahora con la denominación genérica (Policía Federal) y las atribuciones de investigación y persecución de delitos tiene 38 mil.

El resultado inicial fue un escalamiento de la violencia (sin precedentes en los índices de asesinatos vinculados al narco de un año a otro) y la criminalidad, que también hizo evidente una lucha por el control de territorios específicos de rutas y dominio de mercados. Mientras tanto, hubo de pasar algunos meses y el emplazamiento de otros “operativos conjuntos” (Ejército y policías) para que empezaran

¹⁴ Jorge Chabat. “Combatting Drugs in Mexico under Calderon. The inevitable war”, documento de trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), núm. 205, México, 2010, pp. 6-7.

¹⁵ Hay que recordar que al final del sexenio foxista (2005-2006), ante el incremento de la incidencia delictiva y de la violencia proveniente del crimen organizado y el narcotráfico, se implementó el programa México Seguro con un componente militar predominante.

a dirigirse acciones violentas contra los miembros del Ejército y los policías (federales y estatales).

Ahora bien, el desempeño militar (Ejército y Marina) debe analizarse en forma desagregada. Por un lado, considerando la forma en que las dos vertientes en que las divide el Estado mexicano son utilizadas de acuerdo con la agenda presidencial y como producto de las pugnas o rivalidades dentro del gabinete de seguridad (por ejemplo, la Policía Federal *vs.* el Ejército, o bien, *vs.* la Marina), se muestra un comportamiento de competencia interinstitucional antes que de coordinación: se trata de disputar la titularidad de las acciones del organismo o dependencia, cuyos elementos capturan o matan a dirigentes criminales (*capos* de la droga) buscados por Estados Unidos, y no limitar su intervención en operativos como de mero apoyo logístico y de respaldo, estableciendo perímetros de seguridad.

Por otra parte, y no menos importante, es la capacidad real y operativa de las Fuerzas Armadas para ser empleadas en una estrategia mal dirigida y que empezó a agudizar la crisis de seguridad. La fuerza desplegada de elementos militares es mayor ahora que la que se empleó durante el levantamiento zapatista y en el control territorial de un estado. Durante muchos años en la lucha contra las drogas, el desempeño militar fue limitado a la detección y la destrucción de cultivos, y en décadas recientes se incorporó a las Fuerzas Armadas a tareas antinarco de mayor envergadura e importancia (inteligencia y aun investigación y persecución del delito), pero sin la adecuada preparación y sin el marco jurídico que preservara a la institución en un régimen democrático (y con rendición de cuentas, *accountability*), evitando abusos y corrupción.

5. Conclusiones

En las postrimerías del sexenio del presidente Calderón, parte del debate analítico y público es la evaluación de su estrategia de seguridad

en términos de éxito o fracaso. Los resultados controvertidos de la estrategia son el elevado número de víctimas (más de 60 mil desde el 1 de diciembre de 2006) relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, cuya caracterización gubernamental apunta mayormente a delincuentes, a bajas de agentes policiales y militares y en forma mínima a civiles (“daños colaterales”). Persiste el fenómeno dañino de las drogas en México en sus tres manifestaciones elementales de producción, tráfico y consumo, sin observar señales de disminución o control eficaz al respecto.

Otro aspecto es la insistente violencia en el país que ha llevado a reforzar los operativos y los despliegues policiales y militares (11 835 soldados y 3 900 policías federales distribuidos hacia Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas)¹⁶ aun en entidades que no figuraban en el mapa de la estrategia al inicio del sexenio.

Aunado a esto se tiene no sólo la multiplicación exponencial de quejas contra elementos de las Fuerzas Armadas reclamando violación a los derechos humanos (en 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 2 200), sino la forzada consideración de un tema de fondo como es la responsabilidad legal militar en esta materia respecto de la competencia jurisdiccional para tratar estos casos cuando figuran civiles como víctimas de la acción castrense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha visto obligada a intervenir en un debate pospuesto tanto por los gobernantes civiles como por las Fuerzas Armadas, ante el señalamiento internacional de organismos no gubernamentales y del sistema de justicia multilateral, como son la Comisión y la Corte Interamericana de Defensa, de los niveles de impunidad (y

¹⁶ “15 mil 735 efectivos más. Mueven tropas a 7 estados”, en *Diario de México*, 14 de agosto de 2012.

de indefensión aun de los mismos elementos castrenses), que propicia la falta de una reforma adecuada en la materia. En este punto, hay que señalar que entre 2009 y 2011 el gobierno calderonista impulsó, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, cambios a la Ley de Seguridad Nacional para normalizar, desde la perspectiva formal, la actuación castrense en el ámbito de la seguridad pública, lo mismo que algunos cambios en el Código de Justicia Militar, donde se regula de forma limitada el ejercicio jurisdiccional civil sólo en función de un catálogo de delitos específicos, pero no en función del criterio constitucional definido. Las definiciones de la Suprema Corte marcarán, en el mediano plazo, la necesaria adecuación legal en esta materia.

En términos generales, debido a los antecedentes histórico-políticos del caso,¹⁷ no se advierten cambios sustanciales en la visión militarizada de atender la crisis de seguridad mexicana, en el corto y mediano plazos. Sin embargo, tanto el debate como las propuestas de cambios estructurales en el uso de las Fuerzas Armadas deben ser objeto de consideración si se desea preservar e impulsar su profesionalismo y su desempeño, dentro de un marco democrático de transparencia y rendición de cuentas que, en efecto, ayude a la solución de los problemas que enfrenta el país.

¹⁷ Erubiel Tirado. "La relación cívico-militar en México: Hacia la reformulación de un nuevo pacto", en Athanasios Hristoulas (coord.). *Las relaciones cívico-militares en el nuevo orden internacional*, Miguel Ángel Porrúa/Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 2002, pp. 239-256.